

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD EN LOS EJERCICIOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN MÉXICO

1. PRESENTACIÓN

Apenas en la segunda década del siglo XXI se incorporaron a la legislación mexicana ejercicios de democracia directa o participativa, en el nivel federal, no obstante, la existencia de algunos ejercicios a nivel de las entidades federativas.

La instauración de estos ejercicios inicialmente ha sido complejo en cuanto a que si bien estos ejercicios fueron incluidos en el ordenamiento constitucional, no lo fue así en las leyes secundarias, limitando su eficacia desde el inicio.

Sin embargo, después de la celebración de las jornadas comiciales de los dos principales ejercicios que se llevaron a cabo en nuestro país, como es el de consulta popular y el de revocación de mandato; parece ineludible los trabajos de evaluación desde distintas perspectivas que se pueden adoptar.

Una de ellas es la concerniente a las implicaciones jurídico-políticas que tuvieron estos dos ejercicios de democracia participativa. En otras palabras, se trata de un análisis a partir del apego a la constitucionalidad y la legalidad, por un lado; y por otro, para revisar si en estos ejercicios el contexto en el que se desarrolla reúne los requisitos de legitimidad.

Entre todo esto, debe destacarse especialmente la contribución que han tenido estos ejercicios de democracia participativa o directa en el ejercicio de los derechos políticos electorales, en virtud de la reciente incorporación al cuerpo normativo mexicano.

En todo caso, se tomarán en cuenta la normatividad, la participación tanto de partidos políticos como de la ciudadanía, los trabajos de organización, temas de fiscalización y los resultados; así como la perspectiva que representa en beneficio de la sociedad mexicana.

Como se habla de legalidad y legitimidad forzosamente será necesario abordar las normas fundamentales de estos ejercicios democráticos, centrándonos sobre todo en dos de ellos que son la consulta popular y la revocación de mandato no obstante existe la iniciativa ciudadana.

Más adelante se exhibirán nociones fundamentales con el tema de la participación ciudadana para contextualizar la importancia de ello.

Posteriormente se presentará el aspecto que le da un sentido legítimo a este ejercicio, para más adelante analizar los resultados y las perspectivas de estos ejercicios.

2. LA FORMALIDAD

Es necesario reconocer que desde luego la conformación de la representación popular que se refleja en los Poderes de la Unión, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo son la primera muestra de participación activa de la ciudadanía. En México esta forma de participación se mantuvo reconocida legalmente, pero no existieron mayores formas que esta.

En la actualidad esa realidad se ha modificado toda vez que se han ido incorporando, en la última década, los mecanismos de democracia directa a partir de la incorporación de la consulta popular a nivel constitucional en el año 2012 y más tarde, en 2019, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana.

De esta manera: el texto constitucional describe estos mecanismos de la siguiente manera:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares;

...

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

...

IX. Participar en los procesos de revocación de mandato.

...

A nivel reglamentario no obstante la inclusión constitucional de estas figuras de democracia participativa, las leyes secundarias se dieron mucho tiempo después. Para el caso de la Ley Federal de Consulta Popular, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, mientras que la Ley Federal de Revocación de Mandato, fue publicada el 14 de septiembre de 2021, en dicha publicación oficial; mientras que la iniciativa se adicionó a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en términos de lo publicado en el DOF el 20 de mayo de 2014.

Por otro lado, el momento de la realización de cada uno de los ejercicios de participación ciudadana, se requiere una precisión a nivel operativa que lo haga la instancia competente, siendo para la Consulta Popular y la Revocación de mandato el INE mientras que en el caso de la iniciativa ciudadana el propio Congreso.

Como es del conocimiento público, durante los años 2021 y 2022 se han llevado a cabo tanto una Consulta Popular como un ejercicio de Revocación de Mandato, sin que se tenga conocimiento de un procedimiento de Iniciativa Ciudadana.

Para lo anterior el INE aprobó los *Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Consulta Popular, del 1 de agosto de 2021*, mediante el Acuerdo del Consejo General No. INE/CG351/2021 el día 6 de abril de 2021, a los cuales se les realizó una Adenda, a través del Acuerdo No. INE/CG529/2021 de fecha 9 de junio de 2021.

Por su parte, en cuanto a la Revocación de Mandato, se aprobaron unos primeros *Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Revocación del Mandato y sus anexos que son parte integrante del mismo*, mediante el Acuerdo de Consejo General del INE No. INE/CG1444/2021, el pasado 27 de agosto de 2021. Posteriormente, fueron modificados en tres ocasiones mediante los Acuerdos de dicho órgano electoral, a través de los Acuerdos No. INE/CG1566/2021, INE/CG1646/2021 y el INE/CG51/2022, de fechas 30 de septiembre y 10 de noviembre de 2021, y 4 de febrero de 2022, respectivamente.

No obstante la existencia de un marco normativo suficientemente sólido, las cuestiones presupuestales tuvieron una influencia directa con la posibilidad de realizar todas las actividades enmarcados en la legislación ya que fue necesario ajustar el procedimiento de organización de cada uno de los ejercicios democráticos para instalar menos casillas de las que se pudieran hacer; factor que si bien no impidió la oportunidad de que cada ciudadana o ciudadano emitiera su opinión, no son las mejores condiciones que deben considerarse.

3. EL CAMINO DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA CIUDADANA

Es necesario entender la diferenciación de formas en que las personas se han involucrado en los asuntos públicos. En la actualidad, las nuevas generaciones han manifestado un sentido más de conciencia social, sobre todo para algunos temas como los ambientales, pero también se dan una serie de eventos que prueben ese individualismo que caracteriza a la época contemporánea.

Sin embargo, se puede reconocer que la tecnología vino a aportar mayores elementos de interacción con otros, lo que ha generado la construcción de una ambivalencia indisoluble, entre lo individual y lo colectivo, que conduce muchas veces a la asociación de lo privado y lo público. Con razón decía Bauman que “la libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo” (Bauman, 2019:15).

El reflejo de esta visión es transformadora, toda vez que se requiere que las personas, ciudadanos, ciudadanas y menores de edad quienes también tienen derecho a una

participación activa en asuntos públicos, adopten una posición mucho más proactiva, de interés de su entorno. Esto último se ha reflejado más en aspectos ambientalistas que en políticos, lo que ha generado una disminución en la empatía hacia la democracia.

Pero más allá de eso, las personas se están encontrando frente a la posibilidad de ser partícipes de estos temas políticos, y que le da ese sentido de colectividad en su integración como parte de la sociedad. Pero qué características debemos entender para que se de esa participación, y para eso se puede recurrir a la definición que nos ofrece el Instituto Interamericano de Derechos Humanos cuando afirma (Picado, 2019: 55):

toda actividad de los miembros de una comunidad derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones públicas, encomendadas a sus representantes.

De este concepto se puede extraer claramente tres aspectos a considerar: el primero tiene que ver con la integración de la voluntad popular, y lo que se traduce en los derechos de votar tanto en el lado activo como en el pasivo.

El segundo aspecto es que estos ejercicios de democracia directa son los que aparecen para materializar cuando se señala en la definición que se habla sobre “controlar el ejercicio de las funciones públicas” porque esa es la intención última de estos ejercicios, que se escuche la voz ciudadana, en función del desprestigio que se ha ido adoptando por las democracias.

Mientras que el tercer elemento a considerar es cuando se hace la referencia a participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas” ya que se puede alcanzar tanto mediante la representación como a través de los ejercicios de democracia directa, como se traduce en los tres instrumentos aludidos, aunque solamente se hayan utilizado en México dos de ellos.

El planteamiento previo lleva a la consideración obligada, y muy aceptada pero necesaria, que el voto si bien es la expresión mayor de la voluntad ciudadana, no es la única forma de hacerlo, y más cuando se le asocia a la integración de la representación. De hecho, por eso se dice que “el derecho al voto no es simplemente un evento esporádico y potestativo del ser humano, sino que debe conformarse como una garantía de existencia de la democracia en México.” (Franco, 2016: 30).

Para el caso de la Consulta Popular y la Revocación de Mandato el voto se dio más en un sentido de opinión, pero con características similares, toda vez que se requiere que tenga esas mismas cualidades reconocidas en la teoría: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Como consecuencia de lo anterior, se requiere establecer con claridad bajo cuáles motivaciones y esquemas es posible que la población logre desarrollar esa participación política y más específicamente en estos ejercicios de democracia directa.

En relación con lo primero, debe advertirse que el análisis tiene que irse orientando a las formas en que las propias personas van construyendo su ideario político, de tal forma que pueda uno de desentrañar esa parte de formación política de las y los individuos. Puede recurrir mucho a la cultura que se va forjando a lo largo de los años, en su ambiente familiar, profesional, educativo, profesional, etc., pero siempre se van adoptando formas muy claras.

Por eso surge la pregunta obligada de cómo se llegan a conformar las posiciones ideológicas políticas tan diversas y que llevan al posicionamiento de cada quien frente a la forma en que se percibe la realidad democrática y por ende las cuestiones públicas.

Las respuestas a estas interrogantes no son sencillas porque encierra un cúmulo de cuestiones muy complejas de todo el entorno de cada individuo, por eso se dice que:

A través del proceso de socialización, la adquisición de una determinada cultura política o la inserción en el espacio de la comunicación política y la opinión pública, el individuo va conformando sus creencias básicas sobre la sociedad y la política, va

acumulando información y conocimientos y, en fin, va desarrollando sus predisposiciones ante los distintos temas y hechos que configuran la realidad política. (Benedicto, 2017: 228).

Como se viene afirmando, entonces, las motivaciones provienen más bien de la construcción de sus creencias a lo largo de su vida de cada persona, bajo su entorno, su educación, su propia historia, que debe ser enriquecida con información veraz porque si no se distorsiona la realidad.

Por otro lado, las formas en que puede traducirse esas expresiones personales, son las que nos interesa acotar, y aquí hay nuevos retos a los que se debe enfrentar la sociedad mexicana. La historia nos enseña que la participación ciudadana, al menos la formal, se había reducido al voto, aquel que es útil para la conformación de la representación popular; es decir aquella donde se elegía a nuestros gobernantes tanto a nivel federal como local, pero no iba más allá.

Quizás la otra la constituía la militancia en partidos políticos y agrupaciones políticas, que en todo caso tenía como pretensión de acceder al poder político, más que una participación ciudadana interesada en los asuntos de la comunidad. Probablemente la observación electoral que ha sido mínima en nuestro país, haya sido otra expresión formal de intervención en asuntos políticos, pero al ser reducida, no tenía impactos significativos.

Al lado de eso, ya aparecían las expresiones que se iban dando a causa de problemas sociales y que se externaban por medio de las manifestaciones públicas de grupos organizado o por temas de interés común. Hecho que con las nuevas circunstancias sociales ha ido incrementándose sustancialmente, para fortuna de nuestro México.

Pero el cuestionamiento tiene que versar sobre las formas en que puede lograrse una participación política adecuada, por decir lo menos, y entonces se presenta un nuevo planteamiento que resolver. La respuesta tiene que ser forzosamente sobre la necesidad de que la ampliación de mecanismos de participación ciudadana debe erigirse de manera institucional.

Por eso se puede decir con Rokkan que para que se presenten las condiciones pertinentes, debe darse sobre la base de lo que denomina umbrales, señalando que son cuatro: el de legitimación, el de la incorporación, el de la representación y el del poder ejecutivo. (Pasquino, 2021: 74).

Estos esquemas que maneja Rokkan se ubican en la parte de la posibilidad de que las personas puedan tener un acceso a esa participación y eviten limitaciones que se generan a partir primero del reconocimiento a ese derecho, después que se pueda alcanzar y limitar las barreras a la representación y crear las condiciones en las instituciones ejecutivas en virtud de quienes son las que aplican las políticas públicas.

Además, estas condiciones idóneas para las expresiones ciudadanas son las que permiten asociar su intervención a la noción democrática, ya que es la inclusión de la sociedad la que le otorga sentido teleológico a la democracia.

También hay que señalar que precisamente bajo esta perspectiva es cómo debe observarse a estos dos ejercicios democráticos que ya han sido implementados en México. Más allá de las circunstancias en las que se dieron, el simple hecho de su existencia en el sistema jurídico, es ya un paso al frente en el proceso democrático; por supuesto falta que se dé bajo estas condiciones.

4. EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS

Como se dijo inicialmente, en México sólo ha tenido un ejercicio de Consulta Popular y otro más de Revocación de Mandato, lo cual significa que nuestra experiencia en los mismos es aún muy pequeña y llena de obstáculos; esa es quizás una de las mayores preocupaciones.

Por eso se requiere revisar particularmente lo ocurrido en estos primeros ejercicios a manera de conocer el desarrollo, pero también en su dimensión legal y legítima como esquemas de participación ciudadana.

En este sentido, hay que decir que se puede realizar este ejercicio analítico a partir de cuatro consideraciones: naturaleza del ejercicio; opinión solicitada; mesas de recepción instaladas, y participación.

1. Naturaleza del ejercicio democrático.

Si bien ambos ejercicios se encuentran catalogados como de democracia directa realmente tienen una finalidad muy distinta; y la misma legislación nos da cuenta de ello. Por su parte la Ley Federal de Consulta Popular en su artículo 4 nos señala:

Artículo 4. La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación.

Por su parte la Ley Federal de Revocación de Mandato nos dice en su artículo 5 lo siguiente:

Artículo 5. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

De ello se desprende con claridad que mientras la primera tiene por objeto tomar una decisión pública, la segunda tiene como objetivo determinar si continúa en su cargo la persona que es titular de la Presidencia de la República.

Además, otra cuestión sobresaliente es el hecho de quién está facultado para iniciarlo, mientras la primera puede formularse por la propia ciudadanía, integrantes de las Cámaras o el propio titular del Poder Ejecutivo; en el segundo, existe exclusividad por parte de la ciudadanía para actuar como agente activo de la petición.

La coincidencia es que en ambos casos, para que se declare con efectos vinculante debe tener una participación de al menos el 40% de las personas inscritas en el Listado Nominal de Electores.

2. Opinión Solicitada

Como se dijo previamente, para la Consulta Popular se trataba de tomar una decisión, en este caso sobre el enjuiciamiento a ex Presidentes de la República y la pregunta era:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Sí estoy de acuerdo.

No estoy de acuerdo

En cuanto a la Revocación de Mandato, al estar asociada a la continuidad del Presidente de la República, la pregunta fue:

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

3. Mesas Receptoras instaladas

En cuanto a esta temática resulta necesario señalar que resultó muy importante las determinaciones que se tomaron por parte del órgano electoral en función de la propia naturaleza del ejercicio. En el caso de la Consulta Popular tiene un doble parámetro que se

puede observar en los párrafos segundo y tercero del artículo 48 de la Ley de la materia cuando señala:

Artículo 48...

...

El Instituto procurará habilitar los mismos inmuebles para la ubicación de las casillas que fueron determinados para la jornada electoral inmediata anterior. En los casos en que sea necesario, habilitará ubicaciones distintas de conformidad con el procedimiento que para el efecto establece la Ley General.

El Instituto podrá crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior.

...

Por su parte la Ley Federal de Revocación de Mandato contempla ciertas diferencias que se consagran en el segundo párrafo del artículo 41 lo siguiente:

Artículo 41...

El Instituto deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal. En los casos en que sea necesario, habilitará ubicaciones distintas de e con el procedimiento que, para el efecto, establece la Ley General.

...

Como puede observarse, mientras que en la primera existe una posibilidad de crear un agrupamiento de casillas, en la segunda esa opción no se contempla por la legislación, lo que pone provoca que se convierta en una elección de las mismas dimensiones de una elección ordinaria. A pesar de ello, en ambos casos se dispone que deberá procurarse poner la misma

cantidad de casillas que en el último proceso electoral, lo que acarrea una dicotomía en la Consulta Popular.

Al fin de cuentas, el número de mesas de recepción de las opiniones fue de 57,077 mesas receptoras de votación para la Consulta; mientras que en la Revocación el número fue de 57,449.

4. La participación

Se mencionó previamente que para alcanzar un efecto vinculante se requería de un 40% de participación de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores; sin embargo, para ambos ejercicios se quedaron muy lejos.

Ejercicio	Lista Nominal	Mesas Receptoras	Votación	Porcentaje de Participación
Consulta Popular	93.6 millones	57,077	6,663,208	7.11%
Revocación de Mandato	92.8 millones	57,449	16,502,636	17.77%

Fuente www.ine.mx

En lo relativo a esta participación se dieron muchas críticas en función de que no se instalaron el mismo número de casillas que para el Proceso Electoral Federal que fue del orden de 163,666 (<https://computos2021.ine.mx/votos-distrito/mapa>). Lo anterior trajo consigo la discusión si se estaba manteniendo a salvo la universalidad del derecho al garantizar que hubiera casillas cercanas a cada persona que estuviera en condiciones de votar, pero fue una de las cuestiones más impactantes en cuanto a las limitaciones presupuestales en ambos ejercicios.

5. LAS PERSPECTIVAS

Todo el análisis previo nos tiene que llevar a establecer un camino certero sobre la forma en que se desarrollaron estos ejercicios en nuestro país y la utilidad de los mismos a la luz de una idea de su legalidad y su legitimación.

Es bastante aceptado que la idea legalidad se encuentra vinculado a la noción de cumplimiento de la ley. En este caso, debe decirse que existe un marco normativo que se fue construyendo en sus tres niveles, aunque de manera tardía, puede decirse, toda vez que principalmente la legislación secundaria no se emitió dentro de los plazos que las mismas reformas constitucionales que crearon estas figuras lo señalaron.

Por lo tanto, la valoración sobre la legalidad puede decirse que quedo cubierta a partir de las decisiones impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el sistema electoral, funcionó adecuadamente en cuanto a que la instancia jurisdiccional desempeñó su papel, más si se toma que en la época actual, existe una tendencia extrema a la impugnación.

Como en todos los casos, ciertos actores quedaron inconformes con dichas resoluciones, pero al finalizar dichos ejercicios democráticos existieron las condiciones para que la ciudadanía pudiera emitir su opinión en ambos casos, disponiendo de todos los elementos para ello.

Esto es lo que se convierte propiamente un ejercicio cargado de legalidad, se trata de que las personas puedan ejercer sus derechos, en este caso político-electorales, que las autoridades provean de las condiciones para ello, en palabras de Ferrajoli, se trata de las “garantías de los derechos fundamentales.” (2010: 27).

Pero existe otra parte que preocupa más en estos ejercicios. Tiene que ver esencialmente con el entorno en el que se dieron, donde hubo obstáculos para la realización; desde luego, el tema presupuestario cobró demasiada fuerza, porque no sólo se trata de la escasez del mismo, sino que con ello se perdió parte de la fuerza de la institucionalidad del ejercicio.

Ya se ha dicho que para el desarrollo de los ejercicios democráticos, se requiere un base sólida de procesos en los que tanto las autoridades como la propia sociedad, así como los actores políticos, se involucren, de tal manera que en conjunto se provean de las mejores condiciones.

Entonces esa legitimidad debe provenir de qué tanto esas condiciones permitieron que la ciudadanía pudiera externar sus opiniones y si los mismos contribuyeron a la construir más democracia.

Bobbio, refería que “cuando se desea conocer si se ha dado un desarrollo de la democracia en un determinado país, se debería investigar no si aumentó o no el número de quienes tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen, sino los espacios en los que pueden ejercer ese derecho.” (2018: 35).

El análisis tiene que partir de esta noción, porque se traduce más bien en un elemento cualitativo de los ejercicios y por ende de la democracia. Por eso preocupa que ambos ejercicios se dieran bajo características de limitaciones: así se puede ver en cuanto al tiempo de ejecución; en cuanto a los recursos que se otorgaron para ello; a la alta polarización generada con la exacerbada cuota de impugnaciones ocurridas, así como muchas expresiones fuera de la ley que ocurrieron, sobre todo en la Revocación de Mandato cuando participó diverso funcionariado de los poderes, y en la intervención de organizaciones afines a un partido político.

6. CONCLUSIONES

Existe una clara tendencia a la incorporación de mecanismos de democracia directa en nuestro país, que se ha buscado alcanzar mediante la incorporación principalmente de las figuras de la Consulta Popular y de la Revocación de Mandato, aunque también se tiene contemplada la iniciativa ciudadana.

Si bien es cierto que existe una reglamentación constitucional y reglamentaria de las tres figuras, la implementación todavía presenta dudas. Por un lado, las dos primeras se llevaron a cabo durante el año 2021 y 2022 bajo circunstancias adversas, por decir lo menos; en el que situaciones presupuestales y extrema polarización han llevado a cuestionar no su legalidad, pero si su fortaleza de legitimidad.

Se tienen que hacer referencia a ello, en función de la participación de la ciudadanía, toda vez que escasamente hubo una participación del 7.11% y 17.77% en cada ejercicio, que no se acerca a las votaciones más bajas de elecciones federales.

Pro eso la pregunta debe estar orientada, si es una cuestión de las autoridades, que no han provisto las condiciones para que la ciudadanía lo vea como una real posibilidad de intervención de la sociedad, o esta todavía no desarrolla ese elemento de cultura participativa.

En los posterior tiene que partirse de este tipo de interrogantes, pero en todo caso, debe ir acompañada de la solidez de este tipo de ejercicios y disminuir las pretensiones utilización de los mismos para obtención de beneficios electorales o de posicionamiento político.

7. FUENTES

Bibliográficas

- Bauman, Zygmunt, *En Busca de la Política*, Trad. Mirta Rosenberg, 2ª reimpresión, México, Edit. Fondo de Cultura Económica, 2019.
- Benedicto, Jorge, “La Construcción de los Universos Políticos de los Ciudadanos” en Benedicto, Jorge y Morán, María Luz (eds) *Sociedad y Política. Temas de Sociología Política*, 2ª reimpresión, Madrid, Edit. Alianza Editorial, 2017.
- Bobbio, Norberto, *El futuro de la Democracia*, Trad. José F. Fernández Santillán, 9ª reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 2018.
- Ferrajoli, Luigi, *Democracia y Garantismo*, Trad. Perfecto Andrés Ibañez y otros, 2ª edición, Madrid, 2010.

- Franco Cuervo, Juan José, *El derecho humano al voto*, México, Edit. CNDH, 2016.
- Pasquino, Gianfranco, *Nuevo curso de ciencia política*, 2ª reimpresión, Trad. Clara Ferri, México, Edit. FCE, 2021.
- Picado, Sonia, “Derechos Políticos como Derechos Humanos” en Dieter Nohlen y otros (comp.), *Derecho electoral latinoamericano. Un enfoque comparativo*, México, Edit. FCE-UNAM-IIIJ-INE, 2019.

Legislativas

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley Federal de Consulta Popular
- Ley Federal de Revocación de Mandato
- Ley Orgánica del Congreso de la Unión

Cibernéticas

- www.ine.mx